

C.A. de Santiago

Santiago, cinco de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, previa eliminación del considerando Décimo Séptimo.

Y se tiene en su lugar y, además presente.

PRIMERO: En lo que concierne a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, esta Corte adscribe a la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema en su sentencia de 29 de abril de 2015, recaída en la causa Rol N° 24.558.014. En dicha resolución se entregan, en lo pertinente, las reflexiones que se transcriben a continuación: "(...) Octavo: Que, en la especie, las acciones civiles deducidas en este proceso contra del Fisco tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política. Por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Noveno: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del



Estado de Chile. Por esta razón, por ejemplo, no resultan aplicables las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional...”;

SEGUNDO: A lo citado y transcrito viene al caso añadir que la jurisprudencia es casi uniforme en sostener que, tratándose de hechos como los que sirven de sustento a la pretensión del demandante, calificados como delitos de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación integral de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado y que así fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno, en conformidad a la Constitución Política de la República;

TERCERO: En el caso en análisis, por el contexto y circunstancias en que se verificó el ilícito, vale decir, en un período de anormalidad institucional y con la intervención de agentes estatales que provocaron agravios de especial gravedad y connotación, el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad de reparar dicha deuda, porque a ello le obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados, como ocurre por ejemplo, entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980. De esa manera, según se establece en su artículo 27, el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Humberto Nogueira Alcalá Edición 2000, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231);

CUARTO: El derecho interno no es razón que pueda invocarse para eximir al Fisco de Chile del deber de íntegra reparación que contrajo, precisamente porque la aplicación de normas sobre prescripción de Derecho interno contraría la normativa internacional



vigente, pertinente a la materia, e implicaría dejar sin reparación esta clase de atentados.

Todo lo razonado lleva a rechazar la excepción de prescripción planteada.

QUINTO: En lo que dice relación con la excepción de reparación integral estos sentenciadores comparten para su rechazo el razonamiento desarrollado por el tribunal *a quo* en el considerando undécimo de la sentencia apelada.

SEXTO: Que la suma fijada a título de indemnización, deberá ser reajustada conforme a la variación del Índice de Precios del Consumidor, a contar de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y, los intereses se devengaran desde que la demandada incurra en mora.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de siete de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por el 3° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rit C-5119-2020, **con declaración** que los intereses se devengarán a contar del momento en que el Fisco sea constituido en mora.

Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial señora Carrasco, quien estuvo por revocar la referida resolución, atendidas las siguientes consideraciones:

Que, sin desconocer la aplicación del Derecho Internacional conforme a los Tratados vigentes que se encuentran incorporados a nuestra legislación local, ello no significa que queden excluidas las normas sobre prescripción que contemplan particularmente los artículos 2497 y 2332 del Código Civil, la primera referida a que dicha institución corre a favor y en contra del Estado, y la segunda disposición, que en materia extracontractual la responsabilidad prescribe en cuatro años desde la perpetración del hecho.

Que, sin perjuicio de lo anterior, esta disidente estima que no procede la indemnización acogida por el tribunal de base por haber sido ya resarcido el demandante a través de las leyes de reparación, entre



otras, N° 19.992, 19.123, 20874, además de haberse otorgado beneficios de salud, estudios. etc.

Redacción del abogado integrante Sr. Joel González Castillo y del voto en contra, su autora.

Regístrese y comuníquese.

N°Civil-4991-2022.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de esta ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero e integrada por la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie y por el Abogado Integrante señor Joel González Castillo. No firma el Abogado Integrante señor González, por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Elsa Barrientos G. y Fiscal Judicial Clara Isabel Carrasco A. Santiago, cinco de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a cinco de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

